



AMPARO EN REVISION 73/62
SERGIO RAMON BOGARIN AMARILLAS
Y OTROS.

PONENCIA DEL SEÑOR MINISTRO ATANASIO GONZALEZ MARTINEZ
SECRETARIO: Lic. Pedro Esteban Penagos López.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente
al día dieciséis de noviembre de mil novecientos ochenta
y dos.

Vo. Bo.

VISTOS;

RESULTANDO:

PRIMERO.- Por escrito presentado el dos de marzo de mil novecientos setenta y nueve ante el juez de --
Distrito en el estado de Nayarit, residente en la ciudad
de Tepic, Sergio Ramón, Rodolfo y Héctor Javier Bogarín
Amarillas, por su propio derecho, solicitaron el amparo
y la protección de la justicia federal contra las autori-
dades y por los actos que a continuación se indican:

"a).- Del C. Presidente Constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos, reclamamos la expedición, promul-
gación y publicación de una ley agraria inconstitucional,
como son los artículos PRIMERO y CUARTO transitorios -
de la Ley Federal de la Reforma Agraria del 22 de marzo
de 1971, por cuanto deroga al Código Agrario que regía -

desde el 21 de diciembre de 1942 y manda tramitar los -- expedientes agrarios, cualquiera que sea su estado, de -- acuerdo con la nueva ley; objetándola por vicios de re-- troactividad que la vuelven inconstitucional en perjui-- cio serio de esta parte recurrente."

"b).- Reclamamos del ejecutivo federal, subsidiariamente, la inconstitucionalidad del artículo 275 del Código Agrario del 21 de diciembre de 1942, que mandó expedir, promulgar y publicar, por tratarse de la ley secundaria que rige el acto reclamado en sentido estricto."

"c).- Reclamamos del ejecutivo federal como -- máxima autoridad agraria, la resolución presidencial que creó el nuevo centro de población agrícola denominado -- "Juan Escutia" en el municipio de Santiago Ixcuintla, -- Nayarit, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 1965, en la cual se dota al grupo -- gestor con una superficie total de 3,818 hectáreas; reclamando dicha resolución en cuanto afecta a los quejosos sus posesiones sobre 569 hectáreas únicamente, que se -- componen con los lotes [REDACTED] de la zona afectada, -- en la [REDACTED] y cuya propiedad erró-- neamente se atribuyó el gobierno federal."

"d).- Del H. Congreso de la Unión, como autoridad máxima en materia legislativa federal, reclamamos la aprobación de las leyes que reclamamos de inconstitucionales en los incisos a) y b) que anteceden."



"e).- Del Secretario de la Reforma Agraria que substituyó legalmente al Jefe de Asuntos Agrarios y Colonización, le reclamamos la indebida ejecución que por sí o por conducto de sus dependencias realice mediante hechos materiales continuos, para satisfacer la resolución presidencial que crea el nuevo centro de población agrícola denominado "Juan Escutia" en el municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, que conlleva la privación en agravio de los quejosos de los lotes [REDACTED] localizados en la zona afectada, totalizando 569 hectáreas que vienen explotando con justo título los quejosos."

"f).- Del Director de Nuevos Centros de Población Ejidal, reclamamos la opinión que vertió declarando procedente la creación del nuevo centro de población agrícola referido, contraviniendo las disposiciones de la fracción XIV del artículo 27 constitucional, originando con ello la desposesión de una superficie de 569 hectáreas que los quejosos tienen en explotación ganadera constante; además se reclama la ejecución de la resolución presidencial combatida."

"g).- Del C. Gobernador Constitucional del estado de Nayarit y del C. Delegado de la Reforma Agraria en el propio estado, reclamamos en atención a su jerarquía agraria, conforme al artículo 2 de la Ley de la Reforma Agraria vigente, están en aptitud de ejecutar los actos materiales de ejecución reclamados, esencialmente la--

desposesión de los predios que vienen detectando los quejosos y que han precisado en antecedentes."

"h).- Del C. Registrador Público de la Propiedad de Santiago Ixcuintla, Nayarit, reclamamos la inscripción en los libros de dicha oficina, de la resolución presidencial referida a favor del nuevo centro de población agrícola denominado "Juan Escutia" en cuanto afecta las posesiones de los quejosos; además impugnamos de esta autoridad la consecuente cancelación de inscripciones en perjuicio de los quejosos y en general cualquier movimiento registral que afecta a esta parte hasta en tanto se falla el fondo del amparo."

SEGUNDO.- Los promoventes narraron como antecedentes de los actos reclamados lo siguiente:

"1.- En el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de febrero de 1965, se publicó la resolución presidencial que declara procedente la solicitud de un grupo de campesinos radicados en el poblado de Coamilco, municipio de Tuxpan, Nayarit, para la creación de un nuevo centro de población agrícola que se denominaría "JUAN ESCUTIA", ubicado en el municipio de Santiago Ixcuintla, de la misma entidad federativa."

"2.- Para la creación del nuevo centro de población de que se trata se dota a los solicitantes de una superficie total de 3,818 hs. (Tres mil ochocientos dieciocho hectáreas) de temporal y agostadero susceptibles



de cultivo, que se toman de la [REDACTED], asegurándose en la resolución que dicha superficie es propiedad del gobierno federal lo cual es un dato falso."

"3.- Se mandan afectar ilícitamente en perjuicio de los recurrentes los lotes número [REDACTED] en [REDACTED], ciento ochenta y seis hectáreas, del lote número [REDACTED] se afectan 194, ciento noventa y cuatro hectáreas, y del lote [REDACTED] se toman 189, ciento ochenta y nueve hectáreas; tales terrenos que pertenecen en forma individual a cada uno de los recurrentes son auténticas pequeñas propiedades en explotación ganadera, cuya posesión ejercemos en forma quieta, pública, continua y en concepto de dueños, desde fecha anterior a la publicación de la solicitud que formularon los campesinos terceros en el amparo."

"4.- De los títulos que exhibimos para fundar la acción de amparo y que van en copias debidamente autorizadas por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito de Amparo, se justifica el dominio y la posesión que ejercen los recurrentes sobre los lotes [REDACTED] que se afectan en la resolución presidencial, entre otros, se infiere:"

"A).- Según instrumento [REDACTED], otorgado en la ciudad de Tepic, Nayarit, con fecha 10 de agosto de 1964, el señor Ramón Bogarín Valdivia, como representante legal de Sergio Ramón Bogarín Amarillas, adquirió para éste el lote número [REDACTED] del fraccionamiento de la [REDACTED]."

██████████ y anexas, en el municipio ██████████
██████████, Nayarit, con superficie de 186 hectáreas, (ciento -
ochenta y seis hectáreas), cuyos linderos señala el pro-
pio instrumento a fojas 1, una vuelta, tercer párrafo: -
AL NORTE, con el lote número ██████████; AL SUR, con el lote
número ██████████; AL ORIENTE, con el lote número ██████████, AL PONIEN-
TE, con el número ██████████ todos estos lotes del mismo fraccio-
namiento; anotados registralmente en ██████████
Nayarit, en el libro ██████████ serie "██████████", sección ██████████ de
instrumentos públicos, bajo inscripción número ██████████..."

"B).- Por instrumento ██████████, en la misma ciudad
de Tepic, Nayarit, a los 11 días de agosto de 1964, el -
propio señor Ramón Bogarín Valdivia, como representante
legal de José Rodolfo Bogarín Amarillas, adquirió en pro-
piedad el lote número ██████████ del fraccionamiento de la ██████████
██████████ y anexas, en el municipio de ██████████
██████████, de aquella entidad federativa, con superfi-
cie de 196 hectáreas y linderos que señala el documento
que se acompaña y son: AL NORTE, con el lote número ██████████ -
AL SUR con el lote número ██████████ AL ORIENTE, con el lote nú-
mero ██████████ y AL PONIENTE con el lote número ██████████, todos estos
lotes del mismo fraccionamiento. La escritura fue anota-
da en el registro público de la propiedad de Santiago -
Ixquintla, Nayarit, en el tomo ██████████ de la sección
██████████, bajo inscripción número ██████████ y en el tomo ██████████
volumen ██████████ del registro del crédito agrícola, bajo
inscripción número ██████████..."



"C).- Por instrumento [REDACTED], en la misma ciudad de Tepic, Nayarit, el 11 de agosto de 1964, el señor Ramón Bogarín Valdivia, como representante legal de Héctor Javier Bogarín Amarillás adquirió en propiedad el lote - número [REDACTED] del fraccionamiento de la [REDACTED] [REDACTED], municipio [REDACTED], Nayarit, con superficie de 198 hectáreas, ciento noventa y ocho hectáreas, lindando AL NORTE, con el lote número [REDACTED]; AL SUR, con el lote número [REDACTED]; AL ORIENTE con el lote número [REDACTED]; AL PONIENTE con el lote número [REDACTED]; Inscribió el testimonio en el registro público de la propiedad de Santiago Ixcuintla, Nay., en el libro número [REDACTED], serie [REDACTED], sección [REDACTED] de instrumentos públicos bajo inscripción [REDACTED] ..."

"5.- Conviene señalar para efectos del conocimiento del acto reclamado y para no incurrir en la responsabilidad de las partes, prevenida por el artículo 211 de la Ley de Amparo, que ante este propio juzgado federal de Nayarit se radicó el juicio de garantías 577/75, que actualmente se revisa en el Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito de Amparo, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, respecto de la resolución que decretó el sobreseimiento de dicho juicio por inactividad procesal de las partes. En tal procedimiento concurrimos juntamente con otras personas como parte quejosa, aunque no directamente porque al promoverse la demanda nos afectaba una circunstancia legal de incapacidad, por minoría de edad,

y por ello nos representó nuestro padre Ramón Bogarín - Valdivia, sin embargo, una vez alcanzada la mayoría de edad y la libre disposición de nuestros bienes, salimos al amparo por nuestro propio derecho."

"6.- Debe destacarse asimismo que los actos que se reclaman en este nuevo juicio de garantías que venimos promoviendo son distintos, toda vez que aquí se objeta la constitucionalidad de unas leyes agrarias que en aquel diverso amparo no se tocan para nada; en igual forma las autoridades son diversas en cuanto se reclaman actos del Poder Legislativo Federal que no intervino como autoridad en aquel otro amparo y, finalmente, la ejecución de la resolución presidencial no se combate por vicios propios únicamente, sino concebida como actos materiales - continuos de leyes agrarias que tachamos de inconstitucionales, por tales razones este negocio propone cuestiones diversas de estudio constitucional ante este órgano de control."

"7.- En ese orden de ideas, estimando que los actos reclamados y la ley de la que emanan son violatorios de la garantía de legalidad contenida en los artículos 14 y 16 constitucionales, así como la garantía que establece la fracción XIV del artículo 27 constitucional, al privarnos de la posibilidad de audiencia y de la oportunidad de rendir pruebas en contra de la pretensión autoritaria, se surte la causa eficiente del amparo que -



interponemos para combatir la conducta autoritaria y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada."

TERCERO.- Los peticionarios del amparo estimaron vulneradas en su perjuicio las garantías individuales que consagran los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los conceptos de violación siguientes:

"CONCEPTOS DE VIOLACION QUE SE FORMULAN EN PRIMER TERMINO, VERSAN SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES RECLAMADAS. Efectivamente, los artículos 1 y 4 -- transitorios de la Ley Federal de la Reforma Agraria, -- contienen vicios de retroactividad de la ley. Habiéndose expedido esta nueva ley agraria vigente, de fecha 22 de marzo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril del mismo año, y tomando en cuenta que fue aprobada por el órgano legislativo ordinario, se advierte que no puede obrar legalmente hacia el pasado, por que con ello afecta situaciones concretas en perjuicio de los recurrentes. La resolución presidencial reclamada que crea el nuevo centro de población agrícola denominado "Juan Escutia" se publicó en el Diario Oficial Federal aparecido el sábado 27 de febrero de 1965 y dicha resolución fue dictada y fundada por las autoridades agrarias en las disposiciones del Código Agrario anterior, que regía desde el 31 de diciembre de 1942. Al quedar este código expresamente derogado por el artículo primero

transitorio de la nueva Ley Federal de la Reforma Agraria, automáticamente quedó anulado y sin efecto dicho código anterior, por lo que para examinar la legalidad de la resolución reclamada en este amparo, emitida bajo los efectos de la antigua ley, se tiene que recurrir -- forzosamente a la aplicación retroactiva de la nueva -- ley agraria, en perjuicio de los amparistas, ya que para el efecto de analizar la constitucionalidad del artículo 275 de la ley anterior y el propio acto que en sentido estricto reclamamos, disposición en que se apoyaron las responsables para dictar el acto, se hace -- preciso entrar al estudio de la ley antigua, para confrontarla con los textos constitucionales y poder definir si se opone o se ajusta a ellos; pero tal estudio -- no puede realizarse de primera intención, sino analizando previamente la inconstitucionalidad de los artículos primero y cuarto transitorios de la nueva ley agraria, porque en ella no se prevé que las situaciones concretas de derecho o actos que quedaron definidos o perfeccionados antes de la vigencia de la nueva ley, como es la resolución presidencial reclamada, debían seguirse rigiendo por el código agrario anterior y de esta -- forma se permitiría examinar la legalidad del acto reclamado sin recurrir a la ley nueva, sino que ese examen sería a la luz de las leyes secundarias en que se fundó la autoridad al dictar la resolución impugnada; pero como tal circunstancia no está prevista en la nueva ley, --



que evitaría estos conflictos de retroactividad, debe -
convenirse que sólo queda la alternativa de objetar la
constitucionalidad de los artículos primero y cuarto --
transitorios de la nueva ley agraria para que pueda --
efectuarse el examen propuesto en la demanda de amparo,
el cual no sería posible intentar de acuerdo con las --
disposiciones de la nueva ley agraria, porque no fue --
ésta en la que se apoyó la responsable para fundar su -
conducta autoritaria, originándose a esta parte un estado
de indefensión al encontrarse frente a la imposibilidad
de impugnar el artículo 275 de la ley agraria anterior,
por vicios contrarios a la garantía de audiencia; así pues
es manifiesta la inconstitucionalidad de la ley nueva -
por cuanto no prevé la solución de los conflictos a--
grarios anteriores a su entrada en vigor, tácitamente -
se le otorgan efectos retroactivos en este caso perju-
dicando seriamente a los recurrentes, a quien debe exi-
mirse de su observancia en la especie, porque la ley -
impugnada rompe el orden constitucional estatuido en -
el párrafo primero del artículo 14 de la ley máxima.

IMPUGNACION SUBSIDIARIA AL ARTICULO 275 DEL -
CODIGO AGRARIO.- Del análisis de la resolución presi-
dencial reclamada, aparece que las responsables ordena-
ron el acto fundándose entre otras disposiciones de la
ley secundaria, en el referido artículo 275 del Código
Agrario del 31 de diciembre de 1942. Tal norma dice -
textualmente: "Simultáneamente se notificará por oficio

a los propietarios presuntos afectados y a los campesinos interesados, para que en un plazo de 30 treinta días, expresen por escrito lo que a sus derechos convenga... -

"Aunque se contione en la referida disposición un intento por establecer el derecho y garantía de audiencia a favor del propietario presunto afectado, tal norma resulta imperfecta o defectuosa para tales efectos. La garantía de audiencia consagrada por el artículo 14 constitucional no se satisface con un simple traslado al presunto afectado en forma de notificación, sino que dicho imperativo constitucional exige que "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento", para asegurar que los afectados tendrán oportunidad de hacer valer y comprobar derechos, de aportar pruebas, de razonar la defensa para desvirtuar el acto de autoridad. Por no haber existido esa posibilidad de audiencia en el procedimiento agrario seguido ante las responsables que culminó con la resolución presidencial combatida, se dictó un acto contrario a los intereses de esta parte recurrente, que supone la lesión de sus derechos posesorios sobre 569 hectáreas, situadas en la [REDACTED]

[REDACTED], Nayarit, sin llamarlos legalmente al procedimiento administrativo para apersonarse y hacer su defensa. Como la norma referida no establece la mecánica que debe observarse para que los afectados puedan hacer esa defensa de sus bienes, posesiones y derechos, debe convenirse que tanto el acto concreto de aplicación en contra de los quejosos, como la propia norma secundaria son definitivos.



tivamente inconstitucionales al entrar en desacuerdo con el texto constitucional que se contiene en el párrafo II del artículo 14 constitucional.

CONCEPTOS DE VIOLACION SOBRE LA ILEGALIDAD DEL ACTO CONCRETO DE APLICACION.- Se viola en nuestro perjuicio la garantía individual prevista por el artículo 14 constitucional, toda vez que se nos priva mediante la resolución presidencial de nuestros derechos sin que se cumpliera con la formalidad de investigar si explotábamos o no la totalidad de las tierras que constituyen auténticas pequeñas propiedades. La interpretación de esta violación debe hacerse en forma congruente con lo previsto por la fracción XV del artículo 27 constitucional, que ordena "... Las comisiones mixtas, los gobiernos locales y demás autoridades encargadas de las tramitaciones agrarias no pueden afectar en ningún caso la pequeña propiedad agrícola o ganadera en explotación; e incurrirán en responsabilidad por violaciones a la Constitución en caso de conceder dotaciones que la afecten." En la especie, los quejosos habiendo encontrado en sus predios un medio honesto de vivir y un lugar para asentarse definitivamente, se han dedicado por muchos años a la explotación ganadera en los predios controvertidos.

En este negocio jurídico tampoco se acreditó de forma indubitable la capacidad individual en materia agraria de todos y cada uno de los solicitantes que en su mayoría carecen de calidad de ejidatarios contrariando

seriamente y en perjuicio de los quejosos el artículo 54 del Código Agrario, ley que estaba en vigor al dictarse el acto. De haber sido oídos en la iniciación del expediente habríamos impugnado el dicho de los solicitantes y su simulada capacidad."

"Por otro lado se aplica inexactamente el artículo 58 del propio ordenamiento citado que señala:..." "Las propiedades de la federación, de los estados o de los municipios serán afectadas preferentemente a las propiedades privadas, para dotar o ampliar ejidos o para crear nuevos centros de población agrícola ..." Sin embargo en este caso se pretende afectar indebidamente propiedades privadas atribuyéndole el dominio a la federación, lo que es notoriamente inexacto tal como se acredita con los títulos exhibidos en este amparo, de los cuales se pone de relieve que los predios en disputa pasaron a constituir el régimen de propiedad privada, constituyendo además una unidad de explotación ganadera en forma permanente."

"Además la resolución presidencial combatida no razonó que nuestros terrenos por su localización y distintas calidades están lejos de rebasar los límites de la pequeña propiedad agrícola y ganadera amparada por nuestra Constitución Política, sin señalar tampoco las equivalencias a que alude el artículo 106 del Código Agrario, aplicable en el caso a pesar de estar derogado por una ley posterior."



"Se viola la garantía de legalidad contenida - en el artículo 16 de la Constitución, al no establecerse en la resolución la causa legal del procedimiento de afectación agraria, al omitirse el estudio y aplicación del artículo 66 del Código Agrario, previniendo que -- quienes en nombre propio y a título de dominio posean -- de modo continuo, pacífico y público tierras y aguas -- en cantidad no mayor del límite fijado por la propie-- dad inafectable, tendrán los mismos derechos de los -- propietarios inafectables, que acrediten su propiedad -- con títulos debidamente requisitados, siempre que la -- posesión sea cuando menos 5 años anterior a la fecha de publicación de la solicitud o del acuerdo que inicie un procedimiento agrario."

"En tales circunstancias se encuentran los -- quejosos que sin ostentar los certificados de inafecta-- bilidad correspondiente han venido poseyendo en la for-- ma legal preventiva los lotes señalados en la resolución presidencial; en todo caso, independientemente de la fe-- cha en que se regularizaron sus títulos de propiedad han venido poseyendo con anterioridad a la solicitud del -- grupo gestor los terrenos en cuestión."

"Las responsables no atendieron las circuns-- tancias legales que exigen los artículos 100, 271, 272, 274 del Código Agrario que rige el acto reclamado, ya que nada razonó sobre la posibilidad de satisfacer a los

campesinos interesados en otro lugar o afectando otros inmuebles extraños a los quejosos, resaltando en este asunto el silencio del ejecutivo del estado de Nayarit que a pesar del tiempo transcurrido y de haber sido oportunamente notificado, no emitió opinión, lo cual se aprecia del resultando segundo de la resolución."

"En mérito a lo anterior procede otorgar a los recurrentes el amparo y la protección de la justicia federal para que se les reponga en el goce de las garantías violadas en su perjuicio."

CUARTO.- El juez de Distrito indicado, por acuerdo de diez de julio de mil novecientos setenta y nueve admitió la demanda de que se trata, la que se registró con el número 133/79. Seguido el juicio pronunció resolución el doce de mayo de mil novecientos ochenta y uno, que concluyó con el siguiente punto resolutivo.

"UNICO.- Se sobresee el presente juicio de garantías."

Las consideraciones en que se apoya la resolución mencionada, son las siguientes.

"UNICO.- Resulta innecesario transcribir y hacer el estudio de los conceptos de violación expresados a virtud de que tiene prelación el análisis de las causas de improcedencia o de sobreseimiento que en el caso existan, por ser esta cuestión de orden público en el juicio de garantías de conformidad al criterio sustentado por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia número 109, publicada a página 196 del



tomo común al Pleno y a las Salas del último apéndice al Semanario Judicial de la Federación y, en la especie, - resulta que respecto de los actos reclamados hechos consistir en la resolución presidencial que creó el nuevo - centro de población agrícola denominado "Juan Escutia" - del municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, la opinión favorable para la creación de dicho centro de población; las consecuencias de la citada resolución presidencial - como lo son su ejecución material y la inscripción de la misma en el Registro Público de la Propiedad con la consecuente cancelación del registro de las propiedades -- afectadas, cobra aplicación la causal de improcedencia - prevista por el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por el artículo 27, - fracción XIV, de la Constitución general de la República, porque no acreditan que su propiedad esté protegida por algún certificado de inafectabilidad; asimismo tampoco - acreditan fehacientemente las circunstancias previstas - por el artículo 252 de la Ley Federal de Reforma Agraria que establece: "Quienes en nombre propio y a título de - dominio prueben debidamente ser poseedores, de modo con- - tinuo, pacífico y público de tierras y aguas en cantidad no mayor del límite fijado para la propiedad inafectable, y las tengan en explotación, tendrán los mismos derechos y obligaciones que los propietarios que acrediten su propiedad con títulos legalmente requisitados, siempre que

la posesión sea cuando menos cinco años anterior a la -
fecha de publicación de la solicitud o del acuerdo que -
inicie un procedimiento agrario, y no se trate de bienes
ejidales o de núcleos que de hecho o por derecho guarden
el estado comunal. "..."; en virtud de que no acreditan -
haber tenido la posesión de las propiedades que alegan
con cuando menos cinco años anteriormente a la fecha de
publicación de solicitud del nuevo centro de población -
que tiene el carácter de tercero perjudicado en el presen
te juicio de garantías, ya que dicha publicación se reali
zó el día veintisiete de julio de mil novecientos cincuen
ta y siete, y con las fotostáticas certificadas exhibidas
por los quejosos se desprende haber adquirido esas pro
piedades los días diez y once de agosto de mil novecien
tos sesenta y cuatro y, por otra parte, solamente aportan
el dicho de un testigo singular tendiente a acreditar la
posesión en el tiempo y las condiciones que fija la Ley
Federal de Reforma Agraria, el cual no se vincula con -
ningún otro elemento de prueba que lleve a la convicción
fehaciente de la existencia de dichas circunstancias, por
lo que este tribunal federal con las facultades que conce
de el artículo 216 del Código Federal de Procedimientos -
Civiles, aplicado de manera supletoria, considera insufi
ciente dicha prueba para acreditar los extremos de los -
dispositivos invocados, por lo que respecto a ello cobra
aplicación la causal de sobreseimiento prevista por el ar
tículo 74, fracción III, en relación con el artículo 73, -



fracción XVIII; ambos de la Ley de Amparo.- Ahora bien, por cuanto a los actos reclamados hechos consistir en - la expedición, promulgación y publicación de la Ley - - Agraria, inconstitucional en los artículos primero y -- cuarto transitorios de la Ley Federal de Reforma Agraria del 22 de marzo de 1971, por cuanto deroga al Código Agrario; la inconstitucionalidad del artículo 275 -- del Código Agrario del 21 de diciembre de 1942 y la aprobación por el Congreso de la Unión de dichas leyes, resulta que precisamente con el razonamiento hecho con - anterioridad en el sentido de no acreditar la posesión de las propiedades con las características señaladas -- por la Ley Federal de Reforma Agraria en su artículo - 252, de ahí se deriva la falta o inexistencia de interés jurídico de los quejosos, puesto que en esas condiciones dichos dispositivos legales que atacan de inconstitucionales por medio del presente juicio de garantías, no les afecta sus intereses jurídicos, y por tal razón resulta la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo y también respecto de - estos actos reclamados debe sobreseerse el presente -- juicio constitucional en los términos del artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo."

QUINTO.- Inconformes con la resolución a que - se hace mérito, los quejosos interpusieron en su contra recurso de revisión, que fue admitido por el presidente de este alto tribunal por acuerdo de veinte de enero de

mil novecientos ochenta y dos.

El agente del Ministerio Público federal adscrito no formuló pedimento alguno en la presente revisión.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante proveído de veinticinco de marzo - de mil novecientos ochenta y dos, notificado el veintiuno de abril del mismo año, turnó este asunto para su estudio al ministro ponente; y,

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO.- Este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, ya que se interpone contra una -- sentencia pronunciada por un juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se plantea la inconstitucionalidad de una ley emanada del -- Congreso de la Unión, por lo que se está en la hipótesis prevista por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución federal, 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 11, fracción IV bis, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

SEGUNDO.- No se transcriben los agravios que - hacen valer los quejosos recurrentes porque no serán motivo de estudio en el presente fallo, ya que en la espe-



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION.

- 21 -

A.R. 73/82

FORMA 1963
57

cie se advierte que se surten causales de improcedencia del juicio de amparo diversas a las invocadas por el a quo en la resolución recurrida, las cuales deben estudiarse de oficio de conformidad con la tesis jurisprudencial numero ciento nueve, consultable en la página ciento noventa y seis de la octava parte del último --- apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que -- aparece publicada con el rubro "IMPROCEDENCIA".

En efecto, de la resolución dictada por la Sala Auxiliar de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el diecinueve de noviembre de mil novecientos setenta en el amparo en revisión número 6200/66, (cuyo toca se tiene a la vista al emitir este fallo), que ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo número 1864/65 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, se aprecia que por escrito de fecha once de noviembre de mil novecientos sesenta y cinco, presentado ante el juzgado indicado, Ramón Bogorín Valdivia, entre otros, en representación de sus menores hijos [REDACTED] y [REDACTED], demandó el amparo y la protección de la justicia federal contra actos del presidente -- de la República, jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (hoy secretario de la Reforma Agraria), director de Nuevos Centros de Población Ejidal, - gobernador del estado de Nayarit, delegado del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización en el estado - de Nayarit (hoy delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria en el estado), e ingeniero comisionado Joaquín

Franco V., que hizo consistir en la resolución presidencial publicada el veintisiete de febrero de mil novecientos sesenta y cinco, por la que se creó el nuevo centro de población agrícola "Juan Escutia", en Santiago Ixcuintla, Nayarit, dotándolo con una superficie de 3,818-00-00 hectáreas de la [REDACTED], cuya propiedad se atribuye al gobierno federal; y su ejecución.

En consecuencia, por lo que se refiere a los actos reclamados precisados en los incisos c), f) y g), del capítulo correspondiente de la demanda de garantías, que se hicieron consistir en la resolución presidencial publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de mil novecientos sesenta y cinco, por la que se creó el nuevo centro de población agrícola "Juan Escutia", municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, dotándolo de 3,818-00-00 hectáreas, de [REDACTED], cuya propiedad se atribuyó al gobierno federal; la opinión favorable para la creación de ese centro de población; y la ejecución de dicha resolución, reclamados del presidente de la República, director de Nuevos Centros de Población Ejidal, gobernador constitucional del estado de Nayarit y delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria en ese estado; debe decirse que los quejosos los conocieron cuando menos desde el día once de noviembre de mil novecientos sesenta y cinco, fecha en la que por medio de su representante legal formularon contra de dichos actos la demanda de amparo precisada en el párrafo anterior; consecuentemente, habiéndose presentado



la demanda de garantías que originó el juicio de amparo en que se revisa el día dos de marzo de mil novecientos setenta y nueve, es obvio que entre aquella y esta fecha transcurrió con exceso el término de quince días que para interponer el juicio constitucional establece el artículo 21 de la Ley de Amparo, por lo que la presentación es extemporánea, por lo tanto, en la especie se actualizará la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo y procede confirmar en lo conducente, aunque por diversa causal, el sobreseimiento decretado por el juez de Distrito con fundamento en la fracción III del artículo 74 del mismo ordenamiento legal.

Por otra parte, por lo que se refiere a los actos reclamados precisados en los apartados e) y h) del capítulo correspondiente de la demanda de garantías, consistentes en la indebida ejecución de la resolución presidencial que creó el nuevo centro de población agrícola, "Juan Escutia", municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, que conlleva a la privación en agravio de los quejosos de los lotes [REDACTED] de la [REDACTED] localizados en la zona afectada, en la inscripción de la resolución presidencial de referencia en los libros del -- Registro Público de la Propiedad de Santiago Ixcuintla, -- Nayarit, y la consecuente cancelación de las inscripciones anteriores, reclamados del secretario de la Reforma Agraria y del encargado del Registro Público de la Pro--

piedad de Santiago Ixcuintla, Nayarit, respectivamente, - de la lectura de la demanda de garantías se aprecia que los quejosos no imputan a las autoridades responsables - de tales actos reclamados, vicios propios en su ejecución, por lo tanto, decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto de las de las autoridades que tienen el carácter de ejecutoras, ya que no se puede examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, - si éstos no se combaten por vicios propios.

La improcedencia del juicio de amparo en cuanto a los actos de aplicación, comprende a las leyes reclamadas en los incisos a), b) y d) del capítulo correspondiente de la demanda de garantías, ya que por si solas no afectan el interés jurídico de los quejosos, por lo que en la especie se actualiza la causal prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, y el criterio sustentado por la Segunda Sala de este alto tribunal en la tesis número ciento treinta y uno, consultable en la página ciento cinco del informe de labores correspondiente al año de mil novecientos ochenta, que este propio Pleno hace suyo, y que a la letra dice:

"LEYES O REGLAMENTOS; AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION.- Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, -



el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovido del juicio, y no por sí solos considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación, necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo puede combatir por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación."

Consecuentemente, aunque por causas diversas, debe confirmarse el sobreseimiento decretado por el a quo en la resolución recurrida.

Por lo expuesto y fundado; y con apoyo además en el artículo 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.- Se confirma la resolución recurrida.

SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de amparo a que este toca se refiere.

Notifíquese, con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno por unanimidad de diecisiete votos de los señores ministros: López Aparicio, Franco Rodríguez, Cuevas, Castellanos Tena, Lozano Ramírez, Pavón Vasconcelos, Rodríguez Roldán, Inárritu, Palacios Vargas, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Salmorán de Tamayo, Sánchez Vargas, Del Río, León Orantes, Olivera Toro, y presidente Mario G. Rebolledo.

Firman los CC. Presidente, Ministro ponente y el C. Secretario General de Acuerdos que da fe.


EL PRESIDENTE


MARIO G. REBOLLEDO.

MINISTRO PONENTE


ATANASIO GONZALEZ MARTINEZ.

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.


Lic. Manuel Torres Bueno.


Cotejó:

PEPL/mem.

Esta foja pertenece al amparo en revisión número 73/82, promovido por Sergio Ramón Bogarín Amarillas y Otros.

En 6 Abril 1983 para este asunto al C. Acuerdos para la anotación del auto que antecede Conste. 